

REVISTA DE DERECHO

AÑO XX JULIO - SEPTIEMBRE DE 1952 N.º 81

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

COMITE DIRECTIVO:

ROLANDO MERINO REYES
ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA
JUAN BIANCHI BIANCHI
VICTOR VILLAVICENCIO G.
QUINTILIANO MONSALVE JARA
MARIO CERDA MEDINA



ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA - CONCEPCION (CHILE)

PRIMER CONGRESO HISPANO - LUSO - AMERICANO - FILIPINO PENAL Y PENITENCIARIO

Patrocinado por el Instituto de Cultura Hispánica, se realizó en Madrid y Salamanca (España), entre los días 5 y 12 de Julio del presente año, el Primer Congreso Hispano-Luso-Americano-Filipino Penal y Penitenciario.

Estuvieron representados en este Congreso, aparte, naturalmente, del país anfitrión, entre otros los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Filipinas, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Concurrieron, también, como observadores, delegados de Bélgica y Francia.

La Universidad de Concepción y su Honorable Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se hicieron representar oficialmente en este torneo inter-continental, por el Profesor don Orlando Tapia Suárez, catedrático de Medicina Legal y Director de nuestra **Revista de Derecho**, quien se trasladó especialmente a España con tal objeto, en los primeros días del mes de Junio último.

Cabe destacar, desde luego, que este Congreso alcanzó singulares relieves, constituyendo un señalado éxito para sus organizadores, tanto en razón del gran número de delegados extranjeros y nacionales, que se hicieron presentes en él, cuanto por la trascendencia de las conclusiones y recomendaciones adoptadas como resultado de sus deliberaciones.

La Asamblea de delegados, por aclamación, designó Presidente del Congreso al Excelentísimo señor Ministro de Justicia

de España, Dr. Antonio de Iturmendi y Vice-Presidente ejecutivo al Dr. Federico Castejón y Martínez de Arizala, Magistrado del Tribunal Supremo de España, catedrático de Derecho Penal y Presidente del Comité Ejecutivo que tuviera a su cargo la organización del torneo.

El Congreso funcionó dividido en varias Comisiones, subdivididas a su vez en Secciones, las que realizaron el estudio de las ponencias oficiales y temas generales presentados, celebrando también varias sesiones plenarias destinadas a escuchar los informes de dichas comisiones, a discutirlos y a adoptar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Casi todas las sesiones de comisiones y plenarias tuvieron como escenario el Palacio de Justicia de Madrid, a excepción de la última plenaria y la de clausura que se efectuaron en la ciudad de Salamanca, en el paraninfo de la Universidad del mismo nombre.

Las comisiones aludidas y los temas de fondo que tuvieron como ponencias oficiales, fueron las siguientes: **Comisión Primera:** "La casación criminal española, su origen, desarrollo en el mundo hispánico y posibles reformas". **Comisión Segunda:** "El auxilio judicial y policial en el ambiente hispánico, y especialmente la reincidencia internacional". **Comisión Tercera:** "Tratamiento de la criminalidad infantil y juvenil". **Comisión Cuarta:** "Modernos aspectos de las Instituciones Penitenciarias ibero-americanas". **Comisión Quinta:** Valor del diagnóstico psicomédico en lo criminal". **Comisión Sexta:** "Estatutos y Reglamentos". **Comisión Séptima:** "Unificación penal iberoamericana".

El texto de las principales ponencias presentadas por los relatores oficiales de cada una de las comisiones del Congreso, ha comenzado a publicarse en el número anterior de nuestra **Revista de Derecho (*)**, prosiguiendo su publicación en el presente nú-

(*) Véase al respecto: **Eugenio Cuello Calón:** "El tratamiento de la criminalidad infantil y juvenil", páginas 163 a 182 del número 80 de la **Revista de Derecho** (Abril-Junio 1952); **Manuel de la Plaza Navarro:** "La casación criminal española, su origen, desarrollo en el mundo hispánico y posibles reformas", páginas 183 a 205 inclusive del mismo número de la **Revista** recién citado.—**Nota de la Dirección.**

CONGRESO PENAL Y PENITENCIARIO

453

mero (**)) y continuándose en los números siguientes, en la medida que el espacio de que disponemos lo permita.

Dado el enorme interés de los acuerdos, resoluciones, conclusiones y recomendaciones adoptados en este Primer Congreso Hispano-Luso-Americano-Filipino Penal y Penitenciario que comentamos, transcribimos a continuación las conclusiones correspondientes a cada una de las comisiones anteriormente citadas, con exclusión de las aprobadas por la Comisión Sexta, sobre "Estatutos y Reglamentos", las que publicaremos en un número próximo.

COMISION PRIMERA

"LA CASACION CRIMINAL ESPAÑOLA, SU ORIGEN, DESARROLLO EN EL MUNDO HISPANICO Y POSIBLES REFORMAS"

a) Conclusiones de carácter general.

1.ª—La función jurídico-política que la casación cumple, persigue como finalidad más saliente, la de velar por la unidad de la interpretación del Derecho en bien de la seguridad jurídica. Por tanto, la multiplicidad de Tribunales de Casación pugna con ese principio y mantiene aunque sea más atenuadamente la multiplicidad de interpretaciones.

2.ª—La casación como recurso supremo, aunque tiene algunos puntos de contacto con los medios de impugnación ordinarios de

(**) Véase en el presente número: Dr. Antonio Piga Pascual: "Valor del diagnóstico psicomédico en lo criminal", páginas 327 a 367 inclusive; Antonio Quintano Ripollés: "Modernos aspectos de las Instituciones Penales Penitenciarias ibero-americanas", páginas 369 a 383 inclusive; Eugenio Cuello Calón: "Tratamiento de la criminalidad infantil y juvenil" (Continuación), páginas 385 a 414 inclusive.—Nota de la Dirección.

las resoluciones judiciales, presenta características peculiares que obligan a una articulación "sui generis" en su tratamiento procesal.

3.ª—Las ideas rectoras de la casación son las mismas en materia civil y en materia penal y, por tanto, la ordenación del recurso debe ser similar como similares son los problemas que pueden plantearse en uno y otro caso, sin perjuicio de las particularidades de ordenación a que obligue la diversidad de las materias (Civil, Penal y Social) que el recurso supremo suscite.

b) Conclusiones especiales.

1.ª—El problema de infracción de las normas en casación obliga a determinar cuáles son las que exclusiva y concluyentemente pueden censurarse en el recurso supremo y los poderes que en esa materia deben conferirse al juzgador.

2.ª—Debe autorizarse la casación penal para censurar la actividad judicial en la apreciación de las pruebas, cuando al ejercitarla haya incurrido el juzgador en un error de hecho que pueda influir decisivamente en su calificación jurídica.

3.ª—La casación en materia penal puede extenderse a la censura de todas aquellas infracciones legales susceptibles de determinar graves inexactitudes en la aportación del material probatorio sobre el que ha de recaer la decisión de fondo o confusión en las afirmaciones de hecho que la resolución contenga.

La índole del recurso aconseja señalar como un "numerus clausus" las únicas infracciones que en ese aspecto deben ser determinantes de casación.

4.ª—Es conveniente estudiar los casos en que, con independencia de la resolución de fondo, pueda autorizarse la casación por tratarse de resoluciones que infrinjan la Ley, no admitan enmienda por los medios de impugnación ordinarios y causen un perjuicio irreparable; singularmente las dictadas en la fase de ejecución.

5.ª—La ordenación procesal del recurso de casación debe ser trazada de modo que sobre la base de un único escrito por cada parte recurrente, en que se condensen, articulándose específica-

CONGRESO PENAL Y PENITENCIARIO

455

mente, todos los motivos que con arreglo a la ley se autoricen, permita al Tribunal examinarlos con facultades de decisión bastantes para restablecer el derecho perturbado, sea o no con sujeción a los que se articulen, y para determinar las consecuencias que, según la naturaleza de cada uno, hayan sido base de su decisión.

La disposición del procedimiento responderá al propósito de simplificar y abreviar los trámites, procediendo de modo que los recurridos puedan contribuir eficazmente al logro de la justa resolución del recurso por vía de adhesión, de ampliación u oposición, mediante un único escrito por cada parte recurrida con independencia de su intervención en el acto de la vista.

Salvo los supuestos en que la sentencia se anule por defectuosa formación del materia de hecho, el propio Tribunal de Casación dictará la resolución procedente, en sustitución de la anulada, aplicando al hacerlo el criterio sustentado al resolver el recurso supremo.

c) Conclusión adicional.

Teniendo en cuenta que en líneas generales el procedimiento judicial castrense se encuentra impregnado de las mismas finalidades que persigue el recurso extraordinario de casación, y atendidos los precedentes históricos, el mantenimiento de la disciplina la rapidez del procedimiento, pronta efectividad de las penas y peculiares características del mando militar, se estima que no es aconsejable introducir en nuestro Código de Justicia Militar el recurso de casación en la forma y con el alcance establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

COMISION SEGUNDA

"EL AUXILIO JUDICIAL Y POLICIAL EN EL AMBIENTE HISPANICO, Y ESPECIALMENTE LA REINCIDENCIA INTERNACIONAL"

Primera.—Se recomienda, como fórmula unificadora, según la propuesta de la ponencia, que las tres infracciones penales sean de la misma o semejante especie y realizadas en plazo no superior a los cinco años.

Cuando el número de estas infracciones fuere superior al de tres, podrá considerarse al autor como delincuente habitual muy peligroso, sometiéndolo a un tratamiento especial, previo un estudio biopsíquico de su personalidad.

Para el reconocimiento de la habitualidad será preciso que, además de haber sido condenado el delincuente por tres infracciones, de la forma y en el tiempo preceptuado en el párrafo primero, el Tribunal aprecie en la personalidad del reo la inclinación al delito.

Segunda.—Que se tenga en cuenta preceptivamente la sentencia irrevocable pronunciada por el Tribunal, en orden a efectos de reincidencia, mediante la suscripción de un Convenio o Tratado, para después incorporarlo a la legislación penal interna de cada país.

Tercera.—Que igualmente se recomienda la unificación de las medidas a adoptar contra estos delincuentes peligrosos, así como los medios de identificación.

Cuarta.—Que se recomienda a los Gobiernos respectivos la creación de una policía judicial, como medio eficaz para la persecución de estos delincuentes.

En cuanto a la unificación de los medios identificativos, se propone la reunión de técnicos especialistas de todos los países interesados a fin de redactar los más convenientes.

Quinta.—Que se recomienda igualmente el intercambio de notas y demás medios de ayuda tanto judicial como policial directamente. En cuanto al procedimiento a seguir, por lo que se refiere al aspecto judicial, debiera ser el siguiente: El país en que se hubiera cometido la infracción comunicaría al Servicio Central de la Policía Judicial, adscrita a los organismos judiciales y fiscales respectivos, la oportuna referencia con envío de cuantos antecedentes consten en la ficha policial, juntamente con la reseña dactilar y fotografía judicial siempre y, en su caso, la reseña quiroscópica y monodactilar. Además de esta remisión, se hará otra igual al país de origen del infractor reseñado.

El Servicio Central deberá acusar la recepción a la Policía remitente; y a ésta y a todas las demás de los países que han

CONGRESO PENAL Y PENITENCIARIO

457

acudido a este Congreso comunicarles todos los antecedentes que figuran en la ficha control.

La policía remitente informará a la autoridad judicial que conozca del caso de los antecedentes recibidos del Servicio Central y a éste, en su día, de la resolución definitiva recaída. A tal finalidad aquellas autoridades o Tribunales de cada país, comunicarán urgentemente tales decisiones al servicio de policía de su jurisdicción, el que las transmitirá al nacional.

Se recomienda, igualmente, en cierto modo, la separación del auxilio policial, de muy amplios límites, del auxilio judicial cuyos efectos se centran en el valor concedido a la condena.

Sexta.—Se formará una colección dactilar y otra biográfica para hacer constar los antecedentes penales de los delincuentes a que se refieren las anteriores conclusiones, con sede en Buenos Aires, y en el que harán constar, además, las sentencias completas de los países interesados en este Congreso, remitiendo copia de la decisión judicial al país de origen.

Deberá completarse la ficha del sujeto con una más amplia de índole criminológica, en aquellos casos en que se le considere como delincuente habitual muy peligroso, según el concepto más arriba expuesto. Al Servicio Central de Identificación, como ya se ha dicho con sede en Buenos Aires, estarán adscritos, con carácter permanente, y para contribuir así a su mejor funcionamiento, uno o más técnicos especialistas de cada país interesado.

Séptima.—Se nombrará un Comité formado por cinco miembros y del que, por deber radicar en Madrid, serán dos de ellos españoles. Los componentes del mismo, tanto españoles como extranjeros, estarán especializados en alguna de las disciplinas científicas de Derecho Penal, Identificación o Biología Criminal; y

Octava.—Que en la aplicación de estas conclusiones y demás normas complementarias habrá de hermanarse armoniosamente el principio de la justicia con los de defensa social. Asimismo deberán pesar en gran medida las resoluciones y antecedentes de los congresos internacionales que se han ocupado de estas cuestiones.

COMISION TERCERA

"CRIMINALIDAD INFANTIL Y JUVENIL"

Conclusiones:

1.^a—Deberá fijarse un límite mínimo de edad, no inferior a 16 años, hasta el cual no serán aplicadas penas a los infractores, y únicamente medidas de reeducación o médico-psiquiátricas, según los casos.

Excepcionalmente, cuando el menor esté próximo a la edad límite, y si aquellas medidas resultaren ineficaces, podrá ser enviado a los establecimientos a que se refiere la conclusión 3.^a.

2.^a—Es recomendable que los menores de edad superior al límite que se señala en la 1.^a conclusión y hasta una cierta edad no inferior a los 18 años, pueden ser sometidos al régimen anunciado en la 1.^a conclusión, o aquel a que se refiere la conclusión 3.^a.

3.^a—Los restantes menores a quienes les sean aplicadas penas privativas de libertad, deberán cumplirlas en establecimientos en donde el internamiento, que podría tener inicialmente un carácter represivo, sea predominantemente educativo y religioso, preparando al menor para la vida libre, en un ambiente de confianza con el correspondiente sentimiento de responsabilidad, por el sistema Borstal, prisión-escuela o análogos.

4.^a—Si los menores fueran declarados enfermos mentales o anormales, para quienes no sea recomendable el tratamiento referido en las conclusiones anteriores, o cuando el internamiento en los establecimientos indicados sea enteramente ineficaz, podrá adoptarse la medida de protección social más adecuada.

5.^a—El internamiento de los menores podrá ser prorrogado hasta la mayoría de edad, o hasta los años próximos a la misma, cuando sea necesario para la reeducación del menor, siempre con revisión obligatoria del caso en períodos determinados en la Ley o cuando se estime necesario.

CONGRESO PENAL Y PENITENCIARIO

459

6.ª—Si el internado ha llegado al límite máximo de permanencia en el establecimiento y se muestra inadaptado para la vida libre, deberá ser tomada la medida de protección social más recomendable, como, por ejemplo, el internamiento en un establecimiento para habituales o indisciplinados.

7.ª—La jurisdicción para menores tendrá competencia exclusiva para conocer de las infracciones cometidas por los menores a que se refiere la 1.ª conclusión y para decidir sobre las medidas aplicables.

8.ª—Será conveniente que las decisiones sobre el internamiento de los menores a que se refieren las conclusiones 4.ª, 5.ª y 6.ª, y las demás relacionadas con este internamiento, sean confiadas a una jurisdicción especializada, para el conocimiento, lo más profundo posible, de la personalidad del menor.

9.ª—Los Tribunales de Menores, ofrecerán las garantías necesarias para salvaguardar los intereses de los menores, sus parientes y educadores. Es recomendable la intervención del Ministerio Público y la de un abogado defensor a requerimiento de parte interesada, sobre todo en los casos en que se trate de la suspensión o privación de la patria potestad, pero siempre con el espíritu de cooperación con el Tribunal. Los que intervienen en el Tribunal y especialmente los jueces, deben ser especializados, tener la preparación científica y la experiencia necesaria.

Es recomendable la incorporación efectiva de la mujer, que posea la debida preparación, a las funciones de los Tribunales u organismos encargados de la jurisdicción de menores.

10.ª—El menor será observado, física y psíquicamente, antes de la decisión del Tribunal, y durante la aplicación de la medida establecida, especialmente en los casos en que la trascendencia de la medida lo abone.

11.ª—El procedimiento habrá de ser sencillo, rápido y flexible.

La detención de los menores no se hará jamás en las Prisiones o puestos policiales comunes. A falta de dichos locales, siempre estarán separados, de modo absoluto, de los inculcados adultos.

El menor no deberá comparecer nunca en la Audiencia Pública del respectivo Tribunal.

12.ª—Los Tribunales de Menores podrán aplicar las medidas más convenientes para el menor, y modificarlas, sustituirlas o dejarlas sin efecto en cuanto lo exija el interés del mismo.

Dentro de estas medidas, aplicarán principalmente las siguientes:

- a) Perdón.
- b) Amonestación.
- c) Sumisión al régimen de libertad vigilada o de prueba. Esta medida podrá ser combinada con otras.
- d) Colocación en familia adoptiva.
- e) Colocación en régimen de semi-internado.
- f) Internamiento en Instituciones privadas o del Estado, comunes o especiales, según los casos.

El internamiento deberá ordenarse en los casos en que las otras medidas sean ineficaces.

Dicho internamiento tendrá lugar en establecimientos de carácter predominantemente agrícola o industrial, según los intereses del menor y atendiendo especialmente a su capacidad profesional y colocación futura.

El régimen de estos establecimientos se basará en la agrupación de los menores en pequeños grupos familiares afines.

Se organizará el cuidado de los menores después del tratamiento (after Care).

Recomendaciones:

1.ª—Que se estudie el problema de la ampliación de atribuciones de los Tribunales de Menores a los casos de abandono de familia, malos tratos a la mujer o a los hijos, alimentos, tutela y adopción, y que los resultados de dicho estudio sean sometidos al próximo Congreso.

2.ª—Que se recomiende a los Gobiernos de los países representados en este Congreso que carezcan de tales organismos, la creación de Tribunales de Menores, dictando la Legislación adecuada.

CONGRESO PENAL Y PENITENCIARIO

461

COMISION CUARTA

**"MODERNOS ASPECTOS DE LAS INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS IBEROAMERICANAS"**

1.^a—Las instituciones penitenciarias deben tener como finalidad jurídica la de sancionar una conducta punible por las leyes penales; como finalidad moral, la de corregir al delincuente; y, como finalidad social, la de reincorporarle a la vida libre en condiciones de vivir honradamente.

2.^a—El Derecho Penitenciario deberá contener las normas jurídicas necesarias para la aplicación de la pena con garantía de la libertad individual y de la organización social.

3.^a—Que, sirviendo a los fines del Derecho Penitenciario, coexisten con sus medios propios de trabajo, diversas ciencias y artes penitenciarias auxiliares.

4.^a—Que se desvincule lo penitenciario, en cuanto a ejecución de penas, de lo puramente administrativo, coordinándose con lo judicial.

5.^a—Y, en consecuencia, que se propugne la intervención judicial en la ejecución de penas y medidas de seguridad, en cuanto a su duración, de modo preferente mediante un organismo jurisdiccional "ad hoc".

6.^a—Que se simplifique la diversidad nominal de penas privativas de libertad, subsistiendo las distintas modalidades del tratamiento penitenciario.

7.^a—Que las normas fundamentales de la individualización penitenciaria no se establezcan apriorísticamente, sino por el examen individual del penado mediante comisiones mixtas de expertos.

8.^a—Que es deseable la separación en grupos, y a ser posible en establecimientos distintos, de los condenados, no sólo por razón de sexo y edad, sino por la mínima clasificación siguiente:

a) Delincuentes de constitución anormal, viciosa y psicopática, aun sin llegar a la categoría de imputables. Tratamiento psiquiátrico preferente.

b) Delincuentes por perversión personal de factores endógenos, independientes de la educación y el medio. Tratamiento preferentemente de intimidación.

c) Delincuentes por perversión social, de factores exógenos determinados por la ineducación y el medio. Tratamiento ampliamente correctivo, educativo, de resocialización y régimen progresivo en su integridad.

d) Delincuentes por infracción de normas cuyo contenido es indiferente al orden moral. Régimen de mera custodia con posibilidad de tratamiento educativo.

9.ª—Creación de establecimientos especiales para los:

1.º—Judicialmente declarados peligrosos, no delincuentes, a los que por su conducta tendiente al delito se aplica una medida de seguridad para que no lleguen a delinquir.

2.º—Delincuentes multireincidentes y habituales, declarados especialmente peligrosos por los Tribunales, para evitar continúen su repetición de actos delictivos.

10.ª—Que los presos preventivos deben estar sometidos a un tratamiento de aislamiento sin régimen carcelario.

11.ª—Que se organicen patronatos para protección de la familia del preso durante el cumplimiento de la pena y con el fin de orientarlos y encaminarlos después del cumplimiento de la pena en su reintegración social.

12.ª—Que se organicen Bibliotecas y préstamos de libros a presos y penados, previa formación especial de funcionarios de prisiones y de bibliotecarios para la mayor eficacia de este servicio.

Conclusión Adicional.—Se propugna la tendencia a conseguir la rehabilitación del penado por el trabajo en las mismas condiciones económicas y sociales del trabajador libre, mediante un sistema de redención de penas.

CONGRESO PENAL Y PENITENCIARIO

40

COMISION QUINTA

**"VALOR DEL DIAGNOSTICO PSICOMEDICO
EN LO CRIMINAL"**

Primera.—Las divergencias entre el pensamiento jurídico y el pensamiento médico deben armonizarse para valorizar el diagnóstico psicomédico en lo criminal.

Segunda.—La Psicología Médica como base de la Psiquiatría Forense es precisa para la justa determinación de la deficiencia psíquica en su relación con el hecho delictivo.

Tercera.—El valor del diagnóstico psicomédico en lo criminal depende de la formación psicológica, psiquiátrica y axiológica del perito, de los jueces y de los abogados.

Cuarta.—Debe exigirse un criterio ético riguroso en las pericias psiquiátricas en materia penal.

Quinta.—En los casos de prisión preventiva, los pacientes deben ser sometidos a examen psiquiátrico para evitar posibles errores judiciales, cuando haya indicación médica.

Sexta.—Todos los establecimientos penales deberían adoptar el mismo modelo de historia criminológica, para los efectos de organizar una estadística científica y uniforme de la criminalidad (criterio de Oswaldo Loudet, sostenido en el Primero Congreso Latino-Americano de Criminología y que la 5.^a Comisión de este Congreso hace suyo).

Séptima.—Se impone la aplicación del diagnóstico psicomédico en el examen de los inculcados con las garantías necesarias.

Recomendaciones:

Primera.—Se propone como ponencia para el próximo Congreso, el tema de la unificación de la terminología psicológico-psiquiátrica en los Códigos o textos legales para los países participantes.

Segunda.—Recomendar la creación de cátedras de Medicina Legal en las Facultades de Derecho en las que no existe en los estudios actuales.

Tercera.—Recomendar que en las Comisiones legislativas de los países miembros del Instituto, figuren como asesores técnicos profesores de Medicina Legal o especialistas en la materia, en aquellos aspectos que así lo requieran.

COMISION SEPTIMA

"UNIFICACION PENAL"

1.^a—La Comisión entiende ser altamente deseable que se realicen los esfuerzos necesarios para lograr la finalidad de redactar un Código Penal Unico, que sirva de legislación positiva en todos los países que componen el Congreso.

2.^a—Existiendo el propósito surgido en este mismo Congreso de crear un Instituto Penal y Penitenciario Hispano-Luso-Americano-Filipino, se encomienda a este Instituto, como una de las tareas inmediatas a realizar, la redacción de las bases con arreglo a las cuales haya de procederse a la obtención del resultado antes expresado.

3.^a—En la elaboración de este proyecto y guardando analogía los Códigos hispano-luso-americanos con el actual proyecto filipino, debe tenerse en cuenta este último.

4.^a—Estimar acertada la propuesta de que se incorpore al Código Penal como tipo autónomo de delito o como circunstancia de agravación, según los casos, el realizado en la persona de cualquier emigrante quebrantando leyes reguladoras de migración y solicitarlo así de los gobiernos respectivos.

Recomendaciones:

1.^a—Declarar la utilidad y necesidad del estudio del ante-proyecto de acuerdo iberoamericano sobre prevención y represión del delito de moneda falsa, para que en su caso la Comisión organizadora del Segundo Congreso Penal y Penitenciario de España, Portugal, América y Filipinas lo incluya en el temario del mismo.

CONGRESO PENAL Y PENITENCIARIO

465

2.º—Que sean entregados ejemplares de dicho ante-proyecto de acuerdo para estudio por los Gobiernos interesados, ya sean signatarios del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 con ratificación o sin ella, como sucede a Colombia, Cuba, España, Panamá y Portugal, ya no figuren ni como signatarios ni como adheridos al mismo.

3.º—Que el Congreso se sirva remitir dicho ante-proyecto de acuerdo a las Sociedades Científicas, a los especialistas y a las entidades de carácter internacional para que lo estudien, como lo hacen ya la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Oficina Internacional para la Unificación del Derecho Penal y la Comisión Internacional de Policía Criminal, y además a la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria con la recomendación favorable de este Congreso.

RECOMENDACIONES FINALES DEL CONGRESO

1.º

Considerando:

Que en varios países iberoamericanos vive una gran población indígena;

Que por sus especiales peculiaridades culturales, el indio vive al margen de la vida jurídico-cultural de estos países;

Que es urgente su incorporación a la vida jurídico-cultural, como el medio mejor para su redención social;

Que siendo amplio y complejo el estudio de este problema,

Resuelve:

1.º—Señalar como tema preferente y especial el estudio del indio ante el Derecho Penal y Penitenciario, en su próxima reunión.

2.º—Encargar al Instituto Hispano-Luso-Americano-Filipino Penal y Penitenciario la preparación de temas de trabajo y de estudio en relación al indígena y el Derecho Penal y Penitenciario.

2.ª

Es tomada en consideración la propuesta de la Delegación del Brasil de que se celebre en la ciudad de San Pablo, estado de San Pablo, Brasil, en 1954, centenario de fundación, el segundo Congreso Hispano-Luso-Americano-Filipino Penal y Penitenciario.

3.ª

Es tomada en consideración la presentación de la Delegación del Brasil del nombre del profesor Dr. José Loureiro Junior, para Presidente de la Comisión Organizadora del próximo Congreso en la ciudad de San Pablo en 1954, según previene el artículo segundo del Reglamento de los Congresos.
